



JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

INFORME SECRETARIAL

Al Despacho del señor Juez el presente proceso referenciado, con el informe de que se encuentra pendiente resolver incidente de nulidad. Sírvase proveer. Soledad, septiembre 27 de 2022.

MIGUEL ANGEL MIRANDA CERVANTES
Secretario

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD ATLÁNTICO. SOLEDAD, SEPTIEMBRE VEINTISIETE (27) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

Examinado el proceso, se observa que el Dr. JAIME ANTONIO DAZA NAVARRO, quien actúa en condición de apoderado de la señora FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA, presento escrito solicitando se declare nulidad de todo el proceso, invocando la causal 8 del artículo 133 del CGP.

Alega el apoderado de la parte demandada lo siguiente:

III. CAUSAL DE NULIDAD INVOCADA

Se invoca como causal de nulidad, la **indebida notificación** establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, el cual establece: “ *El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...)*

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

IV. HECHOS QUE CONFIGURAN LA NULIDAD INVOCADA

1. La COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A, inició un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía en contra de mi poderdante, señora FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA.
2. El proceso ejecutivo fue iniciado con base en el título valor letra de cambio sin número, como se puede interpretar del mandamiento de pago, dado a que no hemos tenido acceso al expediente aún
3. Mi poderdante no reconoce a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A, como legítima tenedora del título valor por el cual se le inició el proceso ejecutivo en su contra
4. Mi representada afirma que el título valor por el cual la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A le inició el proceso ejecutivo, lo suscribió en el año 2008 en favor del señor RAFAEL SANTRICH.
5. El señor RAFAEL SANTRICH, le hizo un préstamo a mi representada, que no superaban los cuatro millones de pesos.
6. El título valor que suscribió mi representada en el año 2008, estaba en blanco
7. Mi representada, durante más de doce años ha venido pagando al señor RAFAEL SANTRICH, por el crédito que éste le hiciera en el año 2008.



JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

8. Mi poderdante ha pagado muchísimo más de lo que le debía al señor RAFAEL SANTRICH, incluyendo los intereses de usura que le ha venido cobrando.
9. El señor RAFAEL SANTRICH, endosó el título valor a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A
10. El señor RAFAEL SANTRICH, quien endosó el título valor a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A, conoce la dirección de mi poderdante, y también tiene su número de teléfono, con la que constantemente se comunica
11. La señora FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA, se enteró de la existencia del proceso adelantado en su contra, sólo a partir del presente año, por los descuentos en la pensión que le están realizando
12. A pesar de que la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A, no estaba legitimada para hacer efectivo el título valor en contra de mi poderdante, inició el proceso ejecutivo en su contra
13. Del proceso ejecutivo conoció el juzgado TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD, bajo el radicado N° 08758418900320190103300
14. El despacho, libró mandamiento de pago el día 19 de enero del año 2021 por valor de \$25.000.000 más los intereses causados, a pesar de que la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO W & A, no estaba legitimada para actuar en contra de mi representada, que la demanda no reunía los requisitos formales mínimos, y que además, que el documento aportado para la ejecución, no reunía los requisitos para ser considerado título ejecutivo, porque no era claro, ni expreso, ni mucho menos exigible, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del otrora Código General del Proceso
15. En el mismo auto de mandamiento de pago, se ordena a la demandante notificar a la demandada en la forma establecida en el artículo 293 del Código General del Proceso, es decir, a través de emplazamiento.
16. En la primera providencia dictada por el despacho, ya referenciada, también se ordenó el embargo de la pensión que la demandada recibe del FOPEP y de COLPENSIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

17. Al parecer la demandante afirmó en la demanda, desconocer la dirección de notificación de mi representada.
18. El despacho decidió acoger ciegamente los datos aportados por la demandante,
19. El despacho omitió requerir a la parte demandante, a que hiciera las diligencias necesarias para la ubicación de las demandadas, a fin que se surtiera en debida forma la notificación de la demanda, que es el primer acto y más importante dentro del proceso, para que la litis se pueda surtir en debida forma, y la parte demandada pueda ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
20. La demandante así como conoció que la demandada es pensionada del FOPEP y de COLPENSIONES, debió solicitar a esas entidades la información sobre la dirección de mi representada
21. El despacho, así como libró la orden de embargo a los fondos de pensiones, también debió pedir de ellos la colaboración para ubicar a la demandada, haciendo uso de sus poderes de juez
22. La demandante, nunca se dirigió a la secretaría del juzgado, solicitando la notificación personal a los demandados, ni agotó los trámites establecidos en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso
23. El juzgado de conocimiento, ordenó en emplazamiento sin justificación alguna, sin hacer un mínimo análisis inteligible de la situación, ni exigirle a la demandante prueba de haber agotado las diligencias del envío de los citatorios a los demandados, o constancia de que los demandados no aparecían en el registro telefónico, o alguna otra dirección donde se pudieran localizar, o por lo menos el teléfono de los demandados que la demandante tenía a su alcance, y que además tenía contacto permanente
24. El edicto emplazatorio se publicó en el registro único de personas emplazadas, el día 3 de agosto de 2021,
25. El juzgado de conocimiento procedió a nombrar curador ad litem para que representara a los demandados, mediante auto calendaro del 19 de agosto de 2021
26. El día 23 de agosto del año 2021, mismo en que se tuvo por contestada la demanda por parte de la curadora, se dictó el auto de seguir adelante con la ejecución sin hacer un análisis del título



JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00

DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A

DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

Reexaminado el proceso nos encontramos que mediante auto de fecha marzo 13 de 2018, se libró mandamiento de pago y medidas cautelares contra los demandados ENRIQUE

ejecutivo, y de la manera como se había tramitado el proceso, en especial, como se habían llevado a cabo las notificaciones

27. El día 29 de septiembre de 2021, el despacho, resolvió aprobar la liquidación del crédito aportada por la demandante.
28. Sólo con el descuento de su mesada pensional por el embargo ordenado por este despacho, la señora FABIOLA CASTAÑEDA, se enteró de la existencia del proceso que cursa en su contra.
29. Al sufrir las consecuencias de las medidas cautelares decretadas en su contra, la señora FABIOLA CASTAÑEDA ha buscado ayuda para resolver su situación.

V. RAZONES DE DERECHO.

El artículo 290 del Código de General del Proceso, establece sobre la PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACION PERSONAL. Lo siguiente: *"Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones.*

1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo..."

La demandada FABIOLA CASTAÑEDA, no ha sido escuchada sustancialmente por el juez natural

La demandante, conociendo la dirección de la demandada, no la aportó al proceso.

Tampoco hizo el mínimo esfuerzo para ubicar a la demandada, ya que actualmente existen bases de datos a las cuales puede acceder que le pueden suministrar la información necesaria para ubicar a la demandada.

Es más, al parecer, en la demanda, le solicita al juez, oficiar a la NUEVA EPS para que esa entidad informara sobre la ubicación de la demandada.

El despacho, avaló la desidia de la demandante, y no requirió a la parte activa para que utilizara los medios necesarios para la ubicación de la demandada,

El despacho, sin razón que justifique, negó al demandante la solicitud de oficiar a la NUEVA EPS para que diera datos donde ubicar a la demandada, y decidió proferir una resolución judicial que afectó de manera grave a mi poderdante, que fue ordenar el emplazamiento, en el primer auto que libró dentro del proceso, es decir, en el mandamiento de pago, condenando prácticamente a mi defendida, a no poderse defender dentro del proceso



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

Mi poderdante, Resultó afectada en sus derechos fundamentales dentro del proceso judicial del cual nunca tuvo conocimiento y no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción

Existe un defecto procedimental absoluto por falta de notificación del mandamiento de pago

Sobre estos aspectos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2018, así:

En este sentido se comprueba que el juez incurrió en un error, ya que podía usar esa dirección a pesar de que no era la misma que indicó el demandante como dirección de notificaciones del señor Iglesias Flórez. En efecto cuando no aparece la parte, el juez tiene la carga de buscar la dirección. De lo contrario es una carga desproporcionada para el demandado.

Por otra parte, la Corte reitera que, a pesar de la iniciación e impulso de este tipo de procesos corresponde a las partes¹, los jueces son quienes deben realizar las funciones de instrucción de los procesos por sí mismos, tal y como se establecía en el artículo 2 del CPC², y se mantuvo en el artículo 8 del Código General del Proceso (en adelante CGP)³. Adicionalmente, el numeral 4º del artículo 37 del CPC dispone que:

"ARTÍCULO 37. Deberes del Juez. Son deberes del Juez:

4. Emplear los poderes de que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias".

Tal disposición se mantuvo en el numeral 5 del artículo 42 del CGP en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del

asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia".

Con fundamento en lo anterior, se demuestra que la Jueza 4º Civil Municipal de Cartagena omitió sus funciones de instrucción del proceso y de evitar nulidad dentro del mismo, pues a pesar de que dentro del expediente se encontraba otra dirección en la que podía ser notificado el señor Iglesias Flórez, la falladora decidió emplazarlo y acoger ciegamente los datos presentados por el demandante

*(sentencia T-025 de 2018) la **sentencia SU-159 de 2002**⁴, determinó que un procedimiento se encuentra viciado cuando pretermite eventos o etapas señaladas en la ley, establecidas para proteger todas las garantías de los sujetos procesales, particularmente el ejercicio del derecho de defensa que se hace efectivo, entre otras actuaciones, con la debida comunicación de la iniciación del proceso y la notificación de todas las providencias emitidas por el juez que deben ser notificadas de conformidad con lo dispuesto en la ley.*

*En el mismo sentido se pronunció la **sentencia T-996 de 2003**⁵, en la que señaló que:*

*"La Corte ha explicado que cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. **En este sentido, estaría viciado todo proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante para asegurar las garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo**".(Negrilla fuera del texto original).*

*en la sentencia **T-565A de 2010**⁶ "La falta de notificación de una providencia judicial configurará un defecto solo en el caso en el que impida materialmente al afectado el conocimiento de la decisión y en consecuencia se reduzcan las posibilidades de interponer los recursos correspondientes"*

La indebida notificación como defecto procedimental



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

*Esta Corporación ha reconocido la importancia que tiene la notificación en los procesos judiciales. En particular, la **sentencia C-670 de 2004**⁷ resaltó lo siguiente:*

*"[L]a Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que **la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso** mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. (Negrilla fuera del texto original).*

*En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena en la **sentencia C-783 de 2004**⁸, en la que indicó que la notificación judicial es el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por el juez. En consecuencia, tal actuación constituye un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional establecido en el artículo 228 de la Norma Superior.*

La notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de defensa.

*Por su parte, en la **sentencia T-081 de 2009**⁹, este Tribunal señaló que en todo procedimiento se debe proteger el derecho de defensa, cuya primera garantía se encuentra en el derecho que tiene toda persona de conocer la iniciación de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad. De conformidad con lo anterior, reiteró la **sentencia T-489 de 2006**¹⁰, en la que se determinó que:*

"[E]l principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos



0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho". (Negrilla fuera del texto original).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia T-081 de 2009 previamente referida, esta Corporación indicó que la notificación judicial es un acto que garantiza el conocimiento de la iniciación de un proceso y en general, todas las providencias que se dictan en el mismo, con el fin de amparar los principios de publicidad y de contradicción.

Adicionalmente, en esa oportunidad, la Corte Constitucional enfatizó en que la indebida notificación es considerada por los diferentes códigos de procedimiento de nuestro ordenamiento jurídico como un defecto sustancial grave y desproporcionado que lleva a la nulidad de las actuaciones procesales surtidas posteriores al vicio previamente referido.

Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que la notificación constituye un elemento esencial de las actuaciones procesales, en la medida en que su finalidad es poner en conocimiento a una persona que sus derechos se encuentran en controversia, y en consecuencia tiene derecho a ser oído en dicho proceso. Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando se trata de la notificación de la primera providencia judicial, por ejemplo el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago.

Las anteriores consideraciones fueron reiteradas por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2018, en la que además reafirmó que "...Asimismo, ha determinado que la indebida notificación judicial configura un defecto procedimental absoluto que lleva a la nulidad del proceso. En efecto, tal actuación constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor importancia, toda vez que garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales...

...la Sala insiste que la notificación judicial constituye uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en particular la notificación personal, teniendo en cuenta que tal actuación garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales y con ella habilita la participación de los involucrados. Con fundamento en lo anterior, se evidencia que la indebida notificación judicial constituye un defecto procedimental que lleva a la nulidad del proceso.



0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Sea del caso señalar, en primer lugar que para el proceso bajo estudio, la legislación Procesal vigente (Ley 1564 de 2012) ha establecido que los procesos ejecutivos en curso, *se tramitarán hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.*

*En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigencia de este código, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el trámite se adelantará con base en la legislación anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución. **Dictada alguna de estas providencias, el proceso se seguirá conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.** (Negrillas del Despacho)*

Asimismo, el numeral 5 *ibídem* ha preceptuado que “No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, **los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos**, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones. (Negrillas del Despacho)

Quiere decir lo anterior, que para resolver la nulidad propuesta debe tenerse en cuenta la norma vigente para la fecha de su interposición, que tal como se evidencia en el expediente data del año 2019 cuando ya la Ley 1564 de 2012 se encontraba en curso integralmente.

Precisado lo anterior, debe advertirse que el debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas en su contra, conjunto de garantías que por su cardinal importancia están consagradas como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política.

Las nulidades son mecanismos establecidos con el fin exclusivo de garantizar y proteger el derecho constitucional al debido proceso, más no con el ideal de entorpecer el trámite del proceso.

De manera que sólo los casos previstos taxativamente como causales de nulidad en los arts. 133 y 134 del C. G. P se pueden considerar como vicios invalidadores de la actuación cuando el juez lo declara expresamente; y por lo tanto, cualquiera otra circunstancia no cobijada como tal podrá ser una irregularidad (cuyo efecto se puede impedir mediante la utilización de los recursos), pero jamás servirá para fundamentar una declaración de invalidez de la actuación.

Dispone el artículo 134 en su inciso primero que “*Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella*”, para lo cual es menester presentar un escrito en el cuál se exprese el interés para proponer la causal o causales que se invocan y los hechos



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

en que se fundamenta; sino se reúnen tales requisitos, o si existe alguno de los motivos que llevan a tener por saneada la nulidad o que prohíben alegarla por haber caducado la oportunidad para hacerlo, o no lo ésta alegando la persona afectada, debe el juez rechazarla de plano.

Descendiendo al caso en concreto, el apoderado judicial de la parte demandada alega la nulidad Respecto a la nulidad invocada, se tiene que el numeral 8° del artículo 133 del CGP “Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.

Para lo cual el apoderado sostiene que su representada FABIOLA CASTAÑEDA no ha sido escuchada sustancialmente por el juez natural, que la demandante conociendo la dirección de la demandada no la porto al proceso y tampoco hizo el mínimo esfuerzo de ubicarla; así mismo, solicita al juez requerir a la NUEVA EPS, a fin que suministre la información requerida para ser notificada la demandada a los que el despacho avalo la decidía del demandante y niega la solicitud de requerir, y en consecuencia ordeno el emplazamiento a su representada.

Pues bien, una vez reexaminado el expediente que nos ocupa advierte esta Agencia Judicial que, la causal alegada no tiene asidero jurídico, respecto de las circunstancias fácticas narradas, toda vez que para el *sub examine* dentro del proceso se han surtido todas las etapas procesales en legal forma.

Ahora bien, en gracia de discusión si lo que pretende el apoderado judicial del demandado es que prospere una nulidad por indebida notificación, ha de indicarse, que esta agencia judicial no es un ente investigador, por lo tanto, no corresponde la tarea de recolección de información en la entidad propuesta a fin de obtener una información que corresponde a la parte interesada aportar. Así mismo, es menester informar que este despacho se basa en la buena fe de la parte demandante al manifestar en su escrito que desconoce la dirección de notificación de las demandadas y en consecuencia se decide emplazar a las Sras. FABIOLA CASTAÑEDA y NANCY MORALES CARRILLO a través de auto de fecha 19 de enero de 2021, surtiéndose el emplazamiento en el REGISTRO NACIONAL DE EMPLAZADOS con fecha de publicación 19 de enero de 2021. Así mismo, es nombrado curador ad litem a la Dra. DANIELA ISABEL BOCANEGRA CENTENO, identificada con C.C N° 1.043.848.307 y T.P N° 333101, mediante auto de fecha 19 de agosto de 2021, quien contesto la demanda, teniéndose por contestada mediante auto de fecha 23 de agosto de 2021, por lo anterior en la misma fecha se ordenó seguir adelante la ejecución contra las demandadas, practicándose la liquidación de crédito la cual se fijó en lista el día 02 de septiembre de 2021, siendo esta aprobada a través de auto de fecha 28 de septiembre de 2021, por valor de \$35.996.996,59 más costas por valor de \$1.280.000,00.

Cabe anotar que el auto de fecha 19 de enero de 2021 que libró mandamiento de pago se decretaron medidas cautelares en contra de las demandas y que como lo manifiesta en apoderado judicial solo al recibir los descuentos su representada se dio cuenta que tenía un proceso judicial vigente, ya habiendo pasado más de una año y medio desde que se decretaron las mencionadas medidas hasta que se interpuso la solicitud objeto del este proveído. Incluso bajo auto de 16 de julio de 2021, fue desembargada la Sra. NANCY MORALES CARRILLO, librándose los oficios correspondientes.

Teniendo en cuenta todas las anotaciones arriba descritas, sobra entender que la demandada Sra. FABIOLA CASTAÑEDA, tenía pleno conocimiento de la demanda



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
ATLÁNTICO

0875841890003-2019-01033-00
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE SERVICIO W&A
DEMANDADO: FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA Y NANCY MORALES CARRILLO

en su contra y no ejerció en ningún momento algún tipo de actuación para defender sus derechos.

Bajo este orden de ideas, es claro para este operador judicial que no existen elementos suficientes para decretar la nulidad alegada por el apoderado judicial de la parte demandante, por cuanto la notificación a la Sra. FABIOLA CASTAÑEDA se surtió en legal derecho, razón por la cual este Despacho no accederá a los argumentos esbozados por el Dr. JAIME ANTONIO DAZA NAVARRO, como apoderado judicial de la demandada FABIOLA CASTAÑEDA MENDOZA.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD - ATLANTICO,

RESUELVE

1. NEGAR la solicitud de nulidad de todo lo actuado, propuesto por el Doctor JAIME ANTONIO DAZA NAVARRO, en su condición de apoderado judicial de la ejecutada, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
2. Una vez ejecutoriado el presente proveído, prosígase con el trámite procesal pertinente.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE:

JUAN JOSE PATERNINA SIMANCAS
JUEZ

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SOLEDAD
Clic para consultar la fecha de notificación por estado en el sistema TYBA
El Secretario MIGUEL ANGEL MIRANDA CERVANTES

Firmado Por:
Juan Jose Paternina Simancas
Juez Municipal
Juzgado Pequeñas Causas
Juzgado 003 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples
Soledad - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dca4ab1581ea15a80e522a06165a03d7bb7c12db11f4e10d17c0824ce50ff0df**

Documento generado en 28/09/2022 01:16:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>